



ACTIVISMO CLIMÁTICO

ACCIÓN Y REACCIÓN



ÍNDICE

ACERCA DE ESTE INFORME

1

ACCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

2

EL ESPACIO CÍVICO PARA EL ACTIVISMO CLIMÁTICO

5

INCIDENCIA GLOBAL POR LA ACCIÓN CLIMÁTICA

21

RECOMENDACIONES

27

AGRADECIMIENTOS

32

EQUIPO EDITORIAL Y DE
INVESTIGACIÓN

Andrew Firmin
Inés M. Pousadela
Mandeep Tiwana

PORTADA: Jóvenes activistas levantan las manos mostrando ojos vigilantes mientras cantan en el escenario durante la COP25. Foto de Pablo Blázquez Domínguez/Getty Images.

PUBLICADO EN NOVIEMBRE DE 2023



ACERCA DE ESTE INFORME

En todo el mundo, la sociedad civil se está movilizandoo para exigir medidas contra el cambio climático y defender el medio ambiente para las generaciones actuales y futuras. Sin embargo, sus acciones suelen entrar en conflicto con poderosos intereses económicos y políticos, por lo que enfrenta represalias.

Este informe describe algunas de las formas de acción de la sociedad civil, así como las tácticas de represión a las que se expone por ello. Las acciones de la sociedad civil, así como las reacciones frente a ellas, se despliegan en todos los ámbitos, desde el local hasta el global. Se están imponiendo restricciones del espacio cívico contra el activismo climático y ambiental tanto dentro de los países como en ámbitos internacionales, incluidas las conferencias anuales de las partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Este informe analiza los acontecimientos ocurridos desde la COP27, celebrada en noviembre de 2022. Examina las luchas de la sociedad civil en todos los niveles, desde la resistencia de base contra el extractivismo y el acaparamiento de tierras hasta la incidencia transnacional para obtener compromisos más firmes de luchar contra el calentamiento global, mantener los combustibles fósiles bajo tierra

y financiar una transición climática justa. El informe destaca el papel vital que desempeña la sociedad civil a la hora de alertar acerca de la necesidad de limitar la destrucción climática y ambiental, reclamar que los responsables rindan cuentas y promover soluciones.

Publicamos este informe en vísperas de la COP28, la cumbre climática que se celebrará en el contexto de espacio cívico cerrado de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), una potencia de la extracción de combustibles fósiles donde los activistas son detenidos de forma rutinaria y el disenso es criminalizado. Es probable que esto resulte, una vez más, en una oportunidad perdida para alcanzar acuerdos ambiciosos, como ocurrió cuando la COP27 se celebró en Egipto, otro país con espacio cívico cerrado.

No habrá esperanza de superar los poderosos obstáculos que impiden la acción climática a menos que la sociedad civil pueda desempeñar un amplio abanico de funciones vitales. Para abordar la crisis climática se requiere un espacio cívico abierto y habilitado. El cierre del espacio cívico para la acción climática debería ser visto no solamente como una forma de negacionismo climático sino también como el preanuncio de un cambio climático galopante e irreversible.



ACCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

La necesidad de actuar frente a la crisis climática nunca ha estado tan clara. En 2023 se batieron récords de calor en muchos países, y el año va camino de ser el más caluroso jamás registrado. Pareciera que cada día llegan noticias de un nuevo fenómeno meteorológico extremo que pone en peligro la vida de las personas más vulnerables y provoca un caos cuya resolución llevará años y costará millones. Esto sucede a pesar de que la ciencia demuestra cada vez con mayor certeza que el cambio climático se debe a la actividad humana y aumenta considerablemente la probabilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos extremos y condiciones inhabitables. En julio, el secretario general de la ONU, António Guterres, anunció sombríamente que “la era de la ebullición global ha llegado”.

Y, sin embargo, la respuesta de los Estados y del sector privado no es ni remotamente suficiente para hacer frente a la magnitud de la crisis. Los actuales planes de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero están muy lejos de la ambición declarada en el Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. Las empresas de combustibles fósiles están obteniendo pingües beneficios gastando muy poco de ese dinero en la transición a energías renovables, aun cuando la insensatez de depender del petróleo y el gas quedó

nuevamente en evidencia en las repercusiones de la guerra de Rusia contra Ucrania. Al tiempo que se impulsan iniciativas superficiales de lavado de imagen y grandes esfuerzos propagandísticos en torno de la muy limitada inversión en energías renovables, se sigue dando luz verde a nuevos proyectos extractivos. Entretanto, la financiación internacional para promover la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático nunca alcanzó los niveles prometidos, y es probable que el fondo recientemente acordado para compensar las pérdidas y daños causados por el cambio climático también se quede corto.

Los llamamientos más contundentes a poner fin a la locura proceden de la sociedad civil, que no ha cesado de dar la voz de alarma y de concientizar a la opinión pública sobre la necesidad de actuar contra el cambio climático. La sociedad civil exige compromisos más ambiciosos y más financiación. Se opone al extractivismo, promueve la sostenibilidad y defiende a las comunidades frente a la devastación ambiental. Presiona a los Estados y al sector privado para que dejen de aprobar y financiar proyectos extractivos y aceleren la transición hacia energías más renovables y prácticas sostenibles. Un espacio clave para la sociedad civil es el de las cumbres climáticas, como la próxima COP28.

LA VOZ DE ALARMA

El cambio climático pasó a ocupar un lugar prioritario en la agenda global a raíz de la oleada de protestas masivas y acciones disruptivas no violentas que se sucedieron desde 2019. Los participantes, entre ellos muchos jóvenes que salían a la calle por primera vez, se vieron compelidos a actuar tras experimentar en primera persona los efectos cambio climático, prueba irrefutable de su realidad, y por la palpable falta de acción para evitar ulteriores daños.



Foto de Ezra Acayan/Getty Images

Un niño sostiene un cartel donde se lee "¡Estamos estudiando para salvar el mundo!" en Manila, Filipinas, septiembre de 2019.

La rapidez con la que fueron capaces de fijar la agenda demostró el valor de la protesta como respuesta al cambio climático. Muchas de estas protestas han utilizado tácticas de desobediencia civil no violenta y acción directa disruptiva para mantener el cambio climático en los titulares. Estos métodos comunican el hecho de que la emergencia climática no puede resolverse con un abordaje de rutina y que la disrupción será mucho mayor si no se lo trata con la urgencia que requiere. Las tácticas disruptivas se tornaron más atractivas con el tiempo debido a la falta de respuestas más allá de las palabras huecas y el lavado de imagen.

Eventualmente algunos grupos abandonaron las tácticas disruptivas por temor a la opinión pública cuya atención buscan captar. Otros han seguido utilizándolas, ya que no les consta que reduzcan el apoyo a la acción climática. El uso de tácticas controvertidas puede incluso tener un efecto positivo de normalización y legitimación de las respuestas más convencionales.

“ Aunque existen legítimas diferencias de opinión sobre qué formas de incidencia son más eficaces para ganarse los corazones y las mentes, el hecho es que el daño causado por la crisis climática supera con creces la inconveniencia de que un manifestante bloquee un carril del tráfico durante 25 minutos. El derecho a la protesta pacífica es fundamental para la democracia, y muchas de las libertades y derechos de los que gozamos se ganaron y defendieron mediante la protesta pacífica.



Nelli Stevenson, Greenpeace Australia Pacífico

La disrupción no debe equipararse a la violencia ni a la destrucción: cuando el activismo climático obstruye carreteras o medios de transporte, interrumpe acontecimientos deportivos de alto nivel o arroja pintura o sopa a obras de arte, nadie resulta herido. Los y las activistas incluso se aseguran de que las obras de arte no resulten dañadas.

Pero cada vez más los Estados tipifican como delito las tácticas de protesta, equiparando la perturbación del orden público a la violencia y tratando a manifestantes pacíficos como delincuentes.

ACCIÓN EN TODOS LOS FRENTE

La sociedad civil se ha puesto a la altura de la magnitud de la crisis climática y está respondiendo por todos los medios posibles. Además de la protesta, sus métodos incluyen campañas públicas, llamamientos a la solidaridad internacional, litigios, activismo de los accionistas e incidencia con Estados y empresas.

“ La sociedad civil desempeña un papel fundamental a la hora de impulsar nuevas leyes, programas, políticas y estrategias sobre cambio climático, obligar a los gobiernos a rendir cuentas del cumplimiento de sus compromisos, detectar la falta de respuestas gubernamentales coordinadas y garantizar que la elaboración de políticas nacionales no olvide a los pobres.

Caroline Owashaba, Acción para el Desarrollo de la Juventud, Uganda

Las demandas de la sociedad civil contra Estados y empresas en tribunales nacionales e internacionales están dando cada vez más frutos. Por ejemplo, en agosto 16 jóvenes activistas [ganaron un caso](#) en Montana, Estados Unidos. El tribunal dictaminó que las políticas del gobierno estadual en apoyo de los combustibles fósiles violan su derecho a un medio ambiente sano. Hay muchos otros casos judiciales en curso, entre ellos uno iniciado por [seis jóvenes activistas portugueses](#) contra 32 gobiernos europeos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Además de recurrir al litigio, el activismo utiliza las juntas generales anuales de las empresas para promover [resoluciones](#) sobre el clima. En una muestra del cambio que ha logrado, en 2023 grandes financiadores apoyaron resoluciones de reducción de emisiones en las juntas generales de algunas de las mayores empresas petroleras y de gas. El activismo también está presionando a las instituciones para que abandonen sus inversiones en combustibles fósiles. En respuesta a la incidencia sostenida de sus estudiantes, en septiembre la Universidad de Nueva York [se comprometió a desinvertir](#).

La sociedad civil también trabaja en la esfera internacional. En las cumbres COP, la reunión anual más importante sobre cambio climático, la sociedad civil intenta influir en las negociaciones, aportando su enorme experiencia y llevando las voces de las personas y comunidades afectadas.

“ La participación de la sociedad civil en las negociaciones climáticas es extremadamente importante porque, cuando se nos permite influir en las negociaciones, somos un factor clave para avanzar hacia el desarrollo sostenible. Nuestras acciones complementan el diálogo político, por lo que es necesario, e incluso obligatorio, que participemos en estas negociaciones.

Estelle Ewoule Lobé, Acción para la Protección de Refugiados Ambientales y Desplazados Internos de África, Camerún

Pero ni siquiera estos esfuerzos relativamente poco controvertidos gozan de reconocimiento y de las condiciones adecuadas. Y cuando las COP se celebran en países con espacio cívico cerrado, a la sociedad civil le resulta aún más difícil acceder a ellas y hacerse oír.

EL ESPACIO CÍVICO PARA EL ACTIVISMO CLIMÁTICO

El activismo climático y ambiental sufre restricciones como consecuencia del foco específico de su trabajo. En contextos de espacio cívico muy restringido, esto no resulta sorprendente. Pero incluso en países donde el espacio cívico es mayormente respetado los manifestantes y defensores del clima están experimentando reacciones violentas procedentes de fuentes tanto estatales como no estatales.

Esto ocurre porque los poderosos intereses económicos y políticos que se benefician de las prácticas dañinas, y en particular de la extracción y el uso de combustibles fósiles, se sienten amenazados por el movimiento por el clima.

Incluso cuando los líderes políticos y empresariales reconocen públicamente la necesidad de una transición, existe una gran distancia entre la retórica conciliadora y la realidad represiva. Las tácticas de restricción más habituales en países de todo el mundo incluyen el acoso, las amenazas y la violencia, especialmente dirigidas contra activistas indígenas, el vilipendio público, la criminalización de las tácticas de protesta y la represión violenta de las protestas.

Las restricciones se dirigen abrumadoramente contra quienes pasan a la acción. El cambio climático es una realidad colectiva, pero la experiencia de la represión es individual. El objetivo es elevar los costos del activismo para disuadir a la gente de alzar la voz y dificultar la movilización masiva, la expresión de solidaridad y la emergencia de líderes en la lucha contra el cambio climático. Quienes continúan

activos son valientes, pero no deberían tener que serlo.



Una activista indígena brasileña participa en una protesta en la COP27 en Sharm El Sheikh, Egipto, noviembre de 2022.

ACTIVISTAS BAJO PRESIÓN PERSONAL

Dados los riesgos personales que corren, muchos activistas experimentan presiones de familiares y amigos para bajar el tono de su activismo y evitar enemistarse con intereses poderosos.

“ En la República Democrática del Congo (RDC), así como en la mayor parte de África, defender el medio ambiente significa convertirse en el blanco de ciertos políticos y empresarios, porque desafiamos sus intereses. Detrás de cada acre de bosque talado ilegalmente por empresas chinas o europeas se esconde un político congoleño. Cuando empecé mi activismo, recibí mensajes amenazantes que me advertían que meterme con los políticos era buscar problemas. Mi familia y amigos me presionaron mucho cuando empecé a protestar contra la explotación petrolera en la selva del Congo. Pero no puedo dejar de defender el medio ambiente, porque creo que guardar silencio ante un crimen me convertiría en cómplice.



Guillaume Kalonji, Movimiento Levántate RDC

Las personas defensoras de derechos ambientales, de los pueblos indígenas y del derecho a la tierra corren mayor peligro en los países del sur global que cuentan con abundantes recursos naturales, y por lo tanto albergan intereses rapaces que quieren expoliarlos. Estos activistas llevan mucho tiempo resistiendo contra la extracción de combustibles fósiles y el desarrollo de proyectos que causan daños climáticos y ambientales. Por ello llevan largo tiempo experimentando niveles letales de represión.

La conexión entre los derechos de los pueblos indígenas y la

respuesta al cambio climático es clara. Estos derechos son un obstáculo en el camino de poderosas fuerzas, tanto estatales como del sector privado, ávidas de tierras para explotar. El clima también sufre cuando los derechos de los pueblos indígenas son atacados. En cambio, cuando los derechos de los pueblos indígenas y su libertad de gestionar sus territorios son reconocidos, el clima se beneficia. De hecho, las zonas mejor conservadas de la selva amazónica son las que están legalmente reconocidas y protegidas como tierras indígenas.

PELIGRO MORTAL Y AVANCES EN AMÉRICA LATINA

Los desafíos que enfrenta el activismo indígena se observan con intensidad en América Latina. Global Witness [informa](#) que, entre 2012 y 2022, casi 2.000 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente de todo el mundo fueron asesinadas como consecuencia de su trabajo: una cada dos días. Las personas indígenas representan el 34% de los asesinatos, a pesar de que constituyen apenas el 5% de la población mundial. América Latina es la región más letal: en 2022 dio cuenta del 88% de los asesinatos.

Brasil, el país que alberga a la mayor parte de la selva amazónica, fue testigo de 34 asesinatos en 2022. Bajo los cuatro años de gobierno del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, el negacionismo climático y los ataques contra los derechos de los pueblos indígenas fueron de la mano. La deforestación de la Amazonia aumentó drásticamente. La violencia y las amenazas contra las comunidades indígenas se multiplicaron.

Sin embargo, bajo el gobierno progresista que entró en funciones en enero se restablecieron y reforzaron las instituciones de protección de los derechos de los pueblos indígenas, miles de mineros que operaban ilegalmente en zonas indígenas fueron expulsados y la deforestación ha disminuido drásticamente.

La reacción de los poderosos intereses económicos afectados, políticamente bien representados, no se ha hecho esperar. En septiembre, el Tribunal Supremo Federal dio un importante paso adelante cuando falló contra un principio que limitaba la demarcación y titulación a las tierras indígenas que estuvieran ocupadas en una determinada fecha, que negaba la realidad de los desalojos del pasado. Pero el Congreso, muchos de cuyos miembros están vinculados con el agronegocio, respondió aprobando una ley que desafiaba la sentencia del tribunal. El presidente Lula da Silva vetó parcialmente la ley, pero seguramente se producirán nuevos intentos de dar marcha atrás en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Ecuador, otro país amazónico, también ha exhibido avances. En sus elecciones de agosto, la ciudadanía votó en [dos referendos](#) para detener sendos proyectos extractivos: la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, un importante territorio indígena, y la minería metálica en el Chocó andino.

Se trató de un hecho histórico; aparentemente, Yasuní ha sido el primer caso del mundo en que la ciudadanía se ha expresado en las urnas a favor de mantener bajo tierra los combustibles fósiles que destruyen el planeta. Fue un golpe duro para las industrias extractivas, pero queda por verse si se respetarán los deseos de la ciudadanía, dado que sucesivos gobiernos ecuatorianos han abrazado el extractivismo.

En Ecuador, como en otros lugares, la falta de reconocimiento de los derechos territoriales indígenas sigue habilitando la minería, la extracción de petróleo y la deforestación, que destruyen los ecosistemas de los que dependen las comunidades. La resistencia es peligrosa y conlleva amenazas, acoso y una violencia que puede llegar a ser letal.

“ Desde hace tiempo vivimos en conflicto con una empresa petrolera que invadió nuestro territorio. Experimentamos

amenazas y hostigamiento tanto de la empresa como el Estado. Cada día son más nuestros líderes y activistas sociales amenazados. Muchos han sido secuestrados y algunos han sido asesinados. Pero nada de esto nos silencia ni nos detiene, ya que luchamos para salvar nuestros territorios, el espacio de nuestra vida.



Fausto Daniel Santi Gualina, pueblo Sarayaku de la Amazonia ecuatoriana

La participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre conservación y desarrollo también es insuficiente e inadecuada. En junio, grupos indígenas y ecologistas presentaron una demanda ante la Corte Constitucional por un [decreto presidencial](#) aprobado el mes anterior que modificaba las normas sobre consulta ambiental, facilitando así la concesión de licencias mineras.



La líder waorani Nemonte Nenquimo en una protesta de 2020 contra la explotación petrolera en tierras indígenas de la Amazonia ecuatoriana.

MÉXICO: REPRESIÓN SELECTIVA

En México el Estado tolera una amplia gama de protestas, pero a menudo reprime el activismo cuando amenaza determinados intereses gubernamentales o del sector privado. María Reyes, del colectivo Futuros Indígenas, cuenta que inicialmente su participación en la huelga estudiantil no suscitó reacciones negativas, pero la situación fue cambiando a medida que avanzaba su activismo.

“ O tus demandas no son suficientemente radicales y entonces el gobierno no te presta atención, o son demasiado radicales y entonces te tachan de amenaza para la soberanía nacional, te criminalizan e incluso pueden hacerte desaparecer. Tuvimos prueba de ello en noviembre de 2022, cuando se filtró una lista de organizaciones y colectivos considerados amenazas para la soberanía y la seguridad nacional. En esta lista figuraban colectivos de pueblos indígenas, grupos feministas y colectivos de madres en busca de sus hijas e hijos desaparecidos junto con organizaciones terroristas como Al Qaeda e ISIS y cárteles de droga.



María Reyes, Futuros Indígenas, México

Las amenazas en México son reales. En enero, dos activistas ambientales, Antonio Díaz Valencia y Ricardo Arturo Lagunes Gasca, desaparecieron en el estado de Colima. Habían participado en negociaciones entre la comunidad local y una empresa minera. Sus familias acusaron a la empresa de estar implicada en sus aparentes secuestros. En junio, otros dos activistas ambientales, Álvaro Arvizu y

Cauhtémoc Márquez, fueron asesinados. Todo indica que ambos atentados fueron premeditados. Tristemente, forman parte de una larga lista de víctimas.



Manifestación de Viernes por el Futuro en Ciudad de México, marzo de 2022.

La violencia también es frecuente en varios países centroamericanos. Este año en Honduras, dos activistas por el derecho a la tierra aparecieron muertos en el río Gama. Otros dos, Jairo Bonilla y Aly Domínguez, fueron asesinados a tiros. Formaban parte de la comunidad de Guapinol, cuyos habitantes han sido criminalizados, atacados y acosados por resistirse a un proyecto minero contaminante. La situación no ha mejorado con la toma de posesión de un gobierno progresista en enero de 2022. La población afroindígena garífuna también ha seguido denunciando violencia sistémica.

En El Salvador, el presidente populista Nayib Bukele está atacando frontalmente el disenso haciendo uso de los amplios poderes que le concede el estado de excepción. Entre quienes han sido objeto de intimidación por parte de las fuerzas de seguridad por protestar contra un proyecto de construcción en tierras indígenas se cuentan líderes de la comunidad indígena nahua. Otros grupos indígenas se han quejado de la presencia militar en sus territorios. En el marco de una campaña generalizada de detenciones masivas se ha hostigado y detenido arbitrariamente a líderes ecologistas. En enero, cinco activistas ambientales de la comunidad de Santa Marta fueron detenidos y acusados de homicidio por resistir contra un proyecto minero. Se produjeron protestas en reclamo de su liberación. Las activistas mujeres han sido acosadas y estigmatizadas en las redes sociales, evidentemente por personas vinculadas al partido de Bukele.



Un manifestante sostiene un cartel con la imagen de la activista hondureña asesinada Berta Cáceres en una marcha por el Día Mundial del Agua en El Salvador.

Foto de Marvin Recinos/AFP vía Getty Images



LEER MÁS



Brasil retorna a la senda verde ▶



Brasil: un paso adelante para los derechos de los pueblos indígenas ▶



Ecuador: lo que está en juego en la segunda vuelta presidencial ▶



Ecuador: continúan las agresiones y amenazas contra periodistas (EN) ▶

ÁFRICA: EL ACTIVISMO EN LAS PRIMERAS LÍNEAS

El activismo indígena enfrenta desafíos similares en numerosos países africanos donde, en pos del desarrollo económico, se está apurando la extracción de combustibles fósiles y la explotación de zonas boscosas. La cuenca del Congo, la segunda mayor selva tropical después de la Amazonia, es un lugar clave. Las amenazas proceden tanto de fuentes estatales como de intereses del sector privado. Ambos suelen estar estrechamente vinculados, lo cual se traduce en corrupción y falta de rendición de cuentas.

En Camerún, la organización Acción para la Protección de Refugiados Ambientales y Desplazados Internos de África trabaja para proteger los derechos de grupos y comunidades indígenas afectados por la explotación ilegal de los recursos forestales y el tráfico de especies protegidas. Trabajan en la cuenca del Congo, donde son el blanco de poderosos intereses del sector privado y del crimen organizado.

“Somos defensores de derechos humanos y trabajamos en un entorno que no siempre es receptivo al tipo de trabajo que realizamos. Nos enfrentamos a intereses poderosos, como los de las empresas forestales que a menudo explotan los bosques de forma abusiva. Somos objeto de amenazas que nos obligan a limitar nuestro campo de acción para evitar que la situación degenere y se vuelva demasiado riesgosa.

A pesar de todas las medidas legales vigentes para proteger los bosques cameruneses, la explotación forestal, a menudo llevada a cabo en asociación con empresas privadas, da lugar a numerosos abusos. Esto, en conjunto con redes criminales bien organizadas, suele terminar en graves violaciones de derechos humanos y, en general, conduce al despojo de las tierras de estos

pueblos y comunidades.

Estelle Ewoule Lobé, Acción para la Protección de Refugiados Ambientales y Desplazados Internos de África, Camerún

Las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas en Tanzania enfrentan desafíos similares, como relata Gideon Abraham Sanago, del Foro Indígena Pastoril de Organizaciones No Gubernamentales. El Foro es una coalición de organizaciones indígenas que trabajan por los derechos de las comunidades indígenas marginadas de pastores y cazadores-recolectores. Apoya iniciativas comunitarias para reconocer el derecho a la tierra, oponerse a los desalojos y gestionar la tierra de forma sostenible. Pero el Estado suele ver a los pueblos indígenas como un obstáculo para el desarrollo económico. La ausencia de reconocimiento de las identidades indígenas es el punto de partida de la represión.

“Los derechos a la propiedad de la tierra y de los recursos se han violado repetidamente mediante desalojos forzados de tierras ancestrales.

El Estado de Tanzania no reconoce la existencia de pueblos indígenas en el país. En cambio, siempre se refiere a ellos como grupos marginados, comunidades dependientes de los bosques, habitantes de los bosques y otras expresiones similares. Esto limita la capacidad de los pueblos indígenas para ejercer sus derechos consagrados en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de la que Tanzania es signataria pero que claramente no respeta.

Gideon Abraham Sanago, Foro Indígena Pastoril de Organizaciones No Gubernamentales, Tanzania



Foto de Brenton Geach/Getty Images via Getty Images

Protesta de estudiantes en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en el marco del Llamado a la Resistencia por la Justicia Climática contra las Corporaciones del Petróleo y el Gas, septiembre de 2023.

En Sudáfrica, el activismo por el medio ambiente y el derecho a la tierra enfrenta amenazas letales por interponerse en el camino de los intereses económicos. En los últimos años, varios líderes comunitarios han sido asesinados a tiros. En agosto, ese fue el destino del activista por el derecho a la tierra Jomo Keromeng, a quien dispararon 16 veces delante de su familia. Participaba en una campaña para exigir que su comunidad se beneficiara de un proyecto minero. En enero, el Comité de Crisis de Amadiba, que trata de proteger una zona costera, recibió información de un denunciante sobre un complot para asesinar a dos de sus dirigentes.

El vilipendio desde arriba favorece la violencia. Esto se evidenció, en septiembre, cuando el ministro del gobierno Gwede Mantasho, en un discurso en una conferencia sobre petróleo y gas, atacó a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y las acusó de ser agentes extranjeros que buscan frenar el desarrollo.



-  El juego no ha terminado: resistencia contra el oleoducto de África Oriental [\(EN\)](#) ▶
-  Sudáfrica: defensores asesinados, OSC vilipendiadas [\(EN\)](#) ▶

ACTIVISTAS UGANDESES EN EL PUNTO DE MIRA

En Uganda, el activismo enfrenta crecientes restricciones por desafiar poderosos intereses económicos y políticos. Eso es lo que ocurre con Stop EACOP, movilizado contra la construcción del Oleoducto de África Oriental (EACOP), una tubería de 1.500 km de longitud que conectará Tanzania y Uganda.

La primera voz de alarma se dio cuando se impuso el proyecto sin ninguna consulta real con las comunidades afectadas. Quienes intentaron hacer oír su voz fueron criminalizados.

“ A la sociedad civil no se le dio suficiente espacio para pronunciarse sobre las implicaciones del proyecto. Por el simple intento de hacernos oír y movilizar a las comunidades afectadas para denunciar las consecuencias del oleoducto para el medio ambiente y los derechos humanos, el gobierno nos ha calumniado y nos ha llamado “antigubernamentales” y “antidesarrollo”. Como consecuencia de estos calificativos, hemos sido intimidados, amenazados y detenidos por la policía.

El tipo de trabajo que realizamos nos ha llevado a chocar con los poderosos intereses de organismos gubernamentales y empresas privadas. EACOP es un proyecto enorme. Involucra a poderosas fuerzas estatales y privadas que tienen mucho en juego, por lo que enfrentamos muchas restricciones procedentes de ambas.

Ireen Twongirwe, Movimiento de Mujeres por una Economía Verde, Uganda

El activismo ambiental de Tanzania y Uganda considera que el proyecto no solamente contradice los compromisos de reducción de emisiones de ambos Estados, sino que además tendrá efectos devastadores sobre las comunidades y el medio ambiente. La reacción es especialmente feroz porque las empresas estatales de ambos países tienen intereses en el proyecto. Por esta razón la sociedad civil se ha visto obligada a adoptar estrategias de protección.

“ Hace poco, cuatro de nuestros activistas fueron detenidos y acusados de “incitar a la violencia”, transportados en vehículos policiales y mantenidos en la cárcel toda la noche por protestar contra el oleoducto en Kampala. Los activistas protestaban pacíficamente, pero sus detenciones fueron innecesariamente violentas.

Tenemos un fondo, mantenido por varios de nuestros miembros, para pagar fianzas o contratar abogados cada vez que detienen a activistas. Organizamos la representación legal y, en los casos en que existe la posibilidad, exploramos la posibilidad de una fianza anticipada. También nos hemos asociado con organizaciones especializadas en formación en materia de seguridad para proporcionar al activismo herramientas para expresar sus preocupaciones sin poner en peligro su seguridad personal.

Zaki Mamdoo, Stop EACOP, Uganda

La lucha no ha terminado. Con cierto éxito, el activismo local colabora con la sociedad civil internacional para presionar a potenciales financiadores. Numerosos bancos, entre ellos varios sudafricanos, ya se han comprometido a no apoyar el proyecto.

PODER POLÍTICO Y ECONÓMICO EN JUEGO EN ASIA

Los intereses políticos y económicos están en primer plano en varios países asiáticos con gobiernos muy autoritarios que aplican políticas verticalistas de industrialización y extractivismo. Algunos, como Camboya y Vietnam, tienen regímenes de partido único que cada vez más perciben a la acción climática y ambiental como contraria a sus intereses.

El activismo climático y ambiental solía gozar de relativa libertad en Vietnam, en comparación con los defensores de la democracia, los derechos humanos y los derechos de las minorías religiosas. Pero eso ha cambiado en el último par de años en la medida en que el activismo climático y ambiental ha comenzado a ser percibido como sospechoso.

En septiembre, la destacada activista por el clima Hoàng Thị Minh Hồng fue condenada a tres años de prisión bajo falsas acusaciones de evasión fiscal, una táctica que el régimen suele utilizar para encerrar activistas. Al menos otros siete activistas climáticos y ambientales han sido encarcelados con el mismo pretexto.

Algunos de los encarcelados y detenidos en el pasado trabajaron con el gobierno. Ngo Thi To Nhien, detenida en septiembre, trabajó en política energética durante más de 20 años, incluso con el Banco Mundial, y dirige un centro de investigación independiente enfocado en la transición energética. Su detención sugiere que los esfuerzos independientes en materia de política energética ya no son tolerados.

Las organizaciones ambientales y climáticas han ayudado al gobierno a conseguir fondos significativos para financiar proyectos ambientales. Pero el gobierno ha seguido haciendo hincapié en el desarrollo económico impulsado por el más sucio de los combustibles fósiles, el carbón. Esto lo pone en contradicción con sus compromisos internacionales, como los del Acuerdo de París o el acuerdo de Asociación para una Transición Energética Justa firmado con un grupo

de Estados del norte global en 2022. El Estado quiere mantener control sobre la narrativa, y no quiere que la sociedad civil ponga en evidencia la brecha entre el discurso y la práctica. Por eso, a pesar de haber acordado con sus socios internacionales involucrar a la sociedad civil en la transición climática, encierra a quienes podrían revelar verdades incómodas.

“Hasta hace poco, el gobierno vietnamita no se sentía amenazado por las personas defensoras de derechos ambientales. Las autoridades se han beneficiado enormemente de las diversas actividades de las asociaciones vietnamitas en los ámbitos del desarrollo y la protección del medio ambiente, así como de las importantes contribuciones de las OSC internacionales que trabajan en Vietnam. En un reciente informe publicado en los medios oficiales, Vietnam afirmó haber recibido más de 677 millones de dólares de OSC ambientales internacionales entre 2020 y 2022.

El gobierno vietnamita detesta quedar mal. Para Vietnam, las declaraciones públicas de alto nivel equivalen a amenazas contra la seguridad nacional, y las autoridades decidieron acallar esas voces por cualquier medio. Para evitar la condena internacional, en lugar de basar sus acusaciones en las leyes de seguridad nacional, ha recurrido al viejo pretexto de la evasión fiscal, haciendo uso de lagunas jurídicas y aprovechándose de la vaga redacción de algunas leyes fiscales para silenciar a personas defensoras de derechos ambientales.



Penelope Faulkner, Quê Me: Comité de Derechos Humanos de Vietnam

En la vecina Camboya, donde el acaparamiento de tierras por parte de funcionarios del Estado es habitual, el activismo ambiental y por el derecho a la tierra también es considerado un obstáculo para los inte-

reses económicos de una élite que mantiene vínculos estrechos con la familia gobernante. Entre los amenazados se encuentra el grupo ecologista Madre Naturaleza, dirigido por jóvenes, que el Estado cataloga como organización ilegal. En septiembre, a tres representantes de Madre Naturaleza que cumplían penas de cárcel como consecuencia de su labor de defensa de derechos se les denegó el permiso para viajar a Suecia a recibir el Premio Right Livelihood, un galardón anual que reconoce a personas que defienden la vida, los derechos y el medio ambiente. Los activistas indígenas también son criminalizados por gestionar tierras forestales que reclaman como su territorio pero que el Estado insiste en que le pertenecen.

Estos problemas no se circunscriben a los regímenes de partido único. En países con un cierto nivel de competencia democrática, como India y Filipinas, la restricción del activismo climático y ambiental forma parte de los esfuerzos de las élites gobernantes por consolidar su poder.

Filipinas, donde abundan las desapariciones forzadas, es un país particularmente peligroso para el activismo indígena y ambiental. En abril desaparecieron dos activistas por los derechos de los pueblos indígenas, Dexter Capuyan y Gene Roz Jamil “Bazoo” de Jesus, y se sospecha que las fuerzas de seguridad del Estado están implicadas. Sus familias y simpatizantes siguen reclamando su regreso. En junio, cinco líderes y activistas indígenas fueron calificados de terroristas, condición que permite al gobierno congelar sus cuentas bancarias. En septiembre, dos estudiantes que participaban en protestas ecologistas fueron secuestrados y desaparecieron durante casi dos semanas.

En India, el gobierno nacionalista hindú persigue el desarrollo económico a toda costa y, de paso, reprime el disenso. Los activistas climáticos y ambientales, por lo tanto, están cada vez más en su punto de mira.

Las consecuencias pueden ser fatales. Sendhu Munda, activista contra

la tala ilegal de árboles, murió detenido en mayo, al parecer tras recibir una paliza de sus captores. Munda integraba un comité de protección forestal en el estado de Jharkhand.

Las personas indígenas del estado de Odisha sufren una represión policial que incluye secuestros, detenciones arbitrarias, torturas y uso de la fuerza contra manifestantes, todo ello como consecuencia de su oposición a dos proyectos de extracción de bauxita. Los activistas afirman que los proyectos, autorizados por el gobierno nacional tras la modificación de una ley de gestión forestal que eliminó el derecho de consulta, desplazarán a más de 200.000 personas de grupos tribales excluidos.



Foto de Tang Chhin Sothy/AFP vía Getty Images

Activistas ambientales protestan contra una prohibición de viajar frente al Palacio Real en Phnom Penh, Camboya, octubre de 2023.



CRIMINALIZADA POR COMPARTIR UN KIT DE CAMPAÑA

Disha Ravi, fundadora del movimiento Viernes por el Futuro en India, conoce estos peligros como nadie. Pesan sobre ella acusaciones de sedición y conspiración criminal por haber compartido un kit de herramientas de campaña en el contexto de las [protestas masivas de agricultores](#) contra cambios en las leyes agrícolas. El kit es un elemento inocuo que ayuda a la gente a movilizarse en una gran variedad de contextos.

“ Ser activista en India da miedo. India es [el sexto](#) país más peligroso del mundo para el activismo ambiental. Este entorno especialmente peligroso engendra una sensación de inquietud entre todos nosotros.

Históricamente, las amenazas y la criminalización se centran sobre las personas defensoras del medio ambiente que vivían en zonas rurales. Sin embargo, el alcance de estas amenazas se ha ampliado y ahora se extiende también a los activistas urbanos como yo. La marea se ha revertido y cada vez más somos percibidos como formidables enemigos de la agenda del gobierno.

He sido detenida por mi labor ambiental, cruda ilustración de los riesgos que conlleva. Mi detención en 2021 estuvo relacionada con mi apoyo al movimiento campesino, un momento crucial en la lucha contra las represivas leyes agrarias de la India. Pese a que, gracias a la presión sostenida, esas leyes luego fueron revocadas, los procesos legales derivados de mi participación siguen su curso.



Disha Ravi, Viernes por el Futuro India

En comparación, Mongolia ha experimentado avances recientes en el reconocimiento y respeto del espacio cívico – aunque estas mejoras no necesariamente se aplican al activismo climático y ambiental. El gobierno ha intentado silenciar las críticas dirigidas a las explotaciones mineras, a pesar de las numerosas pruebas de su impacto negativo sobre el medio ambiente y la salud y el bienestar de las comunidades, y a la insuficiencia de los procesos de consulta local. Activistas ambientales [denuncian](#) haber sufrido acoso judicial, intimidación, amenazas y violencia procedentes de fuentes estatales y no estatales. Sukhgerel Dugersuren, quien lleva mucho tiempo denunciando las repercusiones de los proyectos mineros y de infraestructuras energéticas a gran escala, está siendo [investigado](#) por cooperación ilegal con un agente extranjero.



LEER MÁS

-  Vietnam: otra vuelta de tuerca [\(EN\)](#) ▶
-  Vietnam: persisten la criminalización y los malos tratos a activistas [\(EN\)](#) ▶
-  Camboya: continúa la criminalización de activistas y de la oposición tras elecciones de fachada [\(EN\)](#) ▶
-  Mongolia: La ONU expresa preocupación por activista ambiental investigado [\(EN\)](#) ▶
-  Activistas filipinos sufren acoso judicial, secuestros y acusaciones de terrorismo [\(EN\)](#) ▶

REPRESIÓN DE LAS PROTESTAS EN EL NORTE GLOBAL

Pareciera que ningún lugar es inmune. Cada vez se imponen más restricciones a las protestas climáticas en países que, por lo demás, tienen un espacio cívico relativamente abierto y se posicionan internacionalmente como líderes en la acción climática. Se trata de países con movimientos de protesta muy vitales que ahora se encuentran amenazados.

Se trata también de países con políticos populistas y nacionalistas de derecha cada vez más influyentes que vilipendian al activismo climático del mismo modo en que demonizan al activismo por los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+. La desinformación climática está muy extendida. El activismo climático es acusado de formar parte de una élite oscura, de algún modo involucrada en una conspiración para controlar a la población. Las restricciones que el gobierno impone al activismo climático no hacen más que legitimar estas opiniones.

En los Países Bajos, el activismo climático exige al gobierno que elimine las subvenciones a los combustibles fósiles, que ascienden a unos 39.900 millones de dólares al año. El gobierno neerlandés se comprometió a acabar con ellas en 2020, pero no lo ha hecho. El activismo ha comunicado su exigencia mediante acciones directas no violentas, bloqueando repetidamente una importante autopista en La Haya, el centro administrativo del país. Las protestas aumentaron en 2023, antes de las elecciones de noviembre, y unas 25.000 personas participaron en una marcha el 9 de septiembre. La policía desplegó cañones de agua y detuvo a 2.400 personas. En agosto, siete activistas holandeses de Extinction Rebellion fueron declarados culpables de sedición por alentar a otros a protestar.

Los activistas movilizados por la acción climática se quejan de que los grupos de agricultores, que también han protagonizado protestas disruptivas en respuesta a recortes de las emisiones de nitrógeno,

han sido tratados con más indulgencia. Sin embargo, cuanto más criminaliza el gobierno las protestas contra el cambio climático, más aumenta el número de manifestantes.

“ Los razonamientos del gobierno ilustran claramente por qué el derecho a la protesta está siendo atacado en Holanda. Es un derecho fundamental que debe protegerse, respetarse y cumplirse. Las autoridades deben tomar como punto de partida el carácter pacífico de las manifestaciones y facilitarlas en la medida de lo posible. Las restricciones deben ser la excepción y no la regla.

— Sieger Sloot, Extinction Rebellion y Marjolein Kuijers, Amnistía Internacional, Países Bajos

La situación es similar en Alemania, donde el movimiento Última Generación está a la vanguardia de la acción directa. Mediante la interrupción del tráfico con cortes de calles, ha generado conciencia e iniciado conversaciones. Ha reunido a un número cada vez mayor de personas y ha hecho recomendaciones prácticas, tales como propuestas para reducir el desperdicio de alimentos y hacer más asequible el transporte público.

Sus acciones han suscitado algunos debates constructivos con gobiernos locales, pero la respuesta nacional ha sido de criminalización, incluso mediante el uso de leyes destinadas a combatir al crimen organizado. Los activistas de Última Generación han sufrido redadas en sus domicilios, confiscación de computadoras portátiles y teléfonos, y congelación de sus cuentas bancarias. Pero, al igual que en los Países Bajos, hay indicios de que la política de mano dura no ha hecho sino aumentar el apoyo al movimiento.

“ Una acusación grave que se está haciendo contra los activistas climáticos es la de formar parte de bandas criminales. Al iniciar una investigación por estos motivos,



Foto de Sean Gallup/Getty Images

La policía detiene a activistas climáticos de Última Generación que pretendían adherirse con pegamento a la calzada en Potsdamer Platz, Berlín, Alemania, octubre de 2023.

la policía puede escuchar sus llamadas telefónicas, leer sus mensajes y allanar sus domicilios.

Este mes de junio, algunos de nosotros hemos sufrido allanamientos en nuestras casas, nos han cerrado las páginas web, nos han congelado las cuentas bancarias y nos han confiscado material de trabajo. Ha sido Angustante para los activistas saber que la policía puede entrar por la fuerza, revolver toda su vivienda y llevarse lo que quiera.

La criminalización de protestas pacíficas organizadas por personas que no pretenden hacer daño a nadie, sino proteger vidas, suscita una solidaridad instantánea. Miles de personas se han unido a las marchas de protesta de Última Generación. Los fondos congelados se han repuesto casi por completo gracias a las donaciones que están llegando a raudales. La gente se pone en contacto con nosotros para preguntarnos cómo pueden contribuir al activismo climático.



Zoe Ruge, Última Generación, Alemania

Otro problema ha sido la actuación violenta de la policía en las protestas. En enero, la policía desalojó por medios violentos a activistas que ocupaban terrenos para intentar impedir la ampliación de una mina de carbón, y luego nuevamente a quienes protestaron contra la represión policial. La policía agredió a periodistas y les impidió el acceso.

Última Generación también está activa en Italia, donde usa tácticas de desobediencia civil no violenta para exigir al gobierno que deje de financiar los combustibles fósiles, reduzca las emisiones, aumente el uso de energías renovables y mejore la eficiencia energética. Pero el gobierno de extrema derecha no está dispuesto a escuchar.

“ Actualmente hay tres activistas de Última Generación sometidos a juicio por haber arrojado pintura al edificio del Senado en Roma. Se les acusa de causar “daños criminales” y podrían pasar hasta tres años en prisión. No importa que la pintura que utilizaron en la protesta fuera lavable. En abril, el gobierno italiano introdujo una nueva ley específicamente para castigar las acciones climáticas que se considere que dañan monumentos o lugares culturales, con multas y posibles penas de cárcel para quienes sean detenidos in fraganti.

Otra herramienta utilizada por el Estado italiano es la acusación de “conspiración criminal”, históricamente utilizada contra la mafia. El gobierno italiano criminaliza al activismo climático porque así puede seguir eludiendo sus responsabilidades relativas al bienestar de sus ciudadanos.

☰ Gabriella Abbate, Última Generación, Italia

También en el Reino Unido, los grupos de acción directa han intentado mantener la atención sobre el cambio climático mediante acciones directas no violentas y desobediencia civil. El gobierno ha reaccionado con la aprobación de leyes restrictivas que criminalizan las protestas disruptivas.

Una gran cantidad de activistas climáticos han sido encarcelados por acciones pacíficas que hasta hace poco no habrían merecido penas de prisión. Se les ha prohibido citar la crisis climática en los tribunales como justificación de sus acciones, y cuando lo han hecho se les ha declarado en desacato. Las empresas de combustibles fósiles también los están demandando en el fuero civil.

Entre los criminalizados se cuentan activistas de Just Stop Oil, uno de los grupos de acción directa más destacados del Reino Unido. Su demanda es sencilla: que el gobierno deje de autorizar proyectos de

combustibles fósiles.

“ Me detuvieron el 19 de julio por marchar a paso lento en la plaza del Parlamento. Sólo estuve en la calle unos segundos antes de que me tiraran de los brazos por la espalda y me esposaran. Estuve detenida en una celda durante 13 horas. Se violó mi derecho a protestar y no se siguieron los procedimientos adecuados.

Además de imponer nuevas leyes draconianas contra las protestas que restringen nuestro derecho legal a salir a las calles, el sistema judicial británico está permitiendo que grandes empresas contaminantes, como la gran petrolera Valero, compren la ley bajo la forma de mandamientos judiciales. Soy una de las muchas personas que enfrentan una espiral de costos y una posible bancarrota porque se están pagando mandamientos judiciales para impedir protestas pacíficas en terminales petrolíferas y carreteras. Muchos de nosotros ya hemos pasado tiempo en la cárcel y pagado multas en tribunales penales, y ahora los tribunales civiles buscan condenarnos nuevamente y hacernos pagar los gastos legales.

☰ Mitch Rose, Just Stop Oil, Reino Unido

La criminalización del activismo climático y su estigmatización impulsada desde arriba se han producido al mismo tiempo que el gobierno ha anunciado que concederá más de 100 nuevas licencias de exploración y perforación de petróleo y de gas. El gobierno parece querer incumplir silenciosamente sus compromisos climáticos. El activismo señala que el partido gobernante ha recibido cuantiosas donaciones de intereses petroleros y gasísticos, y las leyes antiprotesta que ha aprobado llevan el sello de un centro de investigación de derecha que también recibe tales donaciones.

Algunos estados australianos también han aprobado leyes antiprotesta para criminalizar y encarcelar activistas climáticos. Entre ellos se cuenta Nueva Gales del Sur, donde, según una ley de 2022, los manifestantes pueden ser castigados con dos años de cárcel por perturbar la actividad económica, lo que incluye la obstrucción de carreteras y puertos. La ley se promulgó después del bloqueo de un puerto importante por una serie de protestas por el clima. Aunque su condena luego fuera anulada en apelación, la activista Deanna “Violet” Coco, del grupo Fireproof Australia, recibió 15 meses de cárcel por bloquear un carril de tráfico en el puente de la Bahía de Sídney. Otras personas han sido encarceladas en virtud de la ley draconiana de Nueva Gales del Sur. También se han aprobado leyes antiprotesta en Tasmania y Victoria.

Al igual que muchas personas en Australia, Coco se inició en el activismo a raíz de unos devastadores incendios forestales, consecuencia de condiciones meteorológicas extremas en gran medida provocadas por el cambio climático. El gobierno que perdió el poder en mayo de 2022 se caracterizaba por negar el cambio climático, y la gente recurrió a la acción directa para instarle a cambiar de rumbo. La preocupación por el clima, un factor clave a la hora de decidir el voto, se encontraba en la agenda pública gracias a los esfuerzos del activismo climático.

Nueva Zelanda también es escenario de movilizaciones climáticas a gran escala. En febrero, miles de estudiantes abandonaron las aulas para participar en protestas en once ciudades, a raíz de unas condiciones meteorológicas extremas que provocaron las peores inundaciones de la historia reciente. Pero al mes siguiente, cuando

dos activistas de Greenpeace simularon una inundación ante la sede del gigante lácteo Fronterra, la mayor empresa de Nueva Zelanda y una de las principales emisoras de gases de efecto invernadero, fueron detenidos. Y en junio, la activista climática Rosemary Penwarden fue condenada por falsificación luego de difundir una carta evidentemente satírica en la que afirmaba que se había cancelado una conferencia sobre petróleo.



Manifestación por el derecho de protesta frente al tribunal que condenó a Deanna ‘Violet’ Coco en Sídney, Australia, marzo de 2023.



- Australia continúa silenciando la alarma climática [\(EN\)](#)
- Alemania: Policía allana viviendas de activistas climáticos [\(EN\)](#)
- Italia: activistas climáticos criminalizados [\(EN\)](#)
- Países Bajos: acción climática enfrenta reacción violenta [\(EN\)](#)

- Países Bajos: seis activistas climáticos detenidos [\(EN\)](#)
- Nueva Zelanda: activistas y manifestantes climáticos detenidos [\(EN\)](#)
- El Reino Unido da marcha atrás en sus compromisos climáticos [\(EN\)](#)
- Reino Unido: gobierno abandona proyecto de Carta de Derechos [\(EN\)](#)

ES HORA DE RESPETAR LAS LIBERTADES

Los esfuerzos por minar las energías del movimiento climático suelen ser contraproducentes. No se puede ocultar el problema: en todo el mundo la gente está sintiendo los efectos del cambio climático en su vida cotidiana. En un país tras otro los [sondeos de opinión](#) muestran que la crisis climática se ha convertido en una gran preocupación. En muchos países, mucha gente también considera injusta la represión del activismo climático, lo cual aumenta el apoyo al movimiento y alimenta nuevas protestas. Incluso en contextos de represión, el movimiento global por la acción climática sigue creciendo.

El movimiento por el clima debe su resiliencia a su capacidad para establecer conexiones entre las distintas facetas del problema y a su productiva combinación de diversas tácticas, desde la movilización y la disrupción hasta la formación de coaliciones, el intercambio de información y la incidencia a escala local, nacional e internacional.

“Última Generación integra la [coalición A22](#), una red internacional de activistas que emplean la desobediencia civil no violenta para exigir a sus gobiernos que adopten medidas para hacer frente al colapso ecológico. La coalición se creó en 2022 y ya incluye al menos 10 campañas diferentes que buscan incidir sobre gobiernos de Europa y el Pacífico y sobre el de los Estados Unidos.

Esta red es una gran fuente de apoyo. Nos ayudamos mutuamente a aumentar la visibilidad de nuestras campañas. Sin duda nos ha ayudado a atraer a más gente a [Non Paghiamo il Fossile](#) (No pagamos por los fósiles) y a otras campañas ambientales tanto en Italia como en otros países.

 Gabriella Abbate, Última Generación, Italia

Pero cada vez más el movimiento está teniendo que centrarse en estrategias defensivas para hacer frente a la represión. Esto implica costos de oportunidad: en ausencia de restricciones, las energías empleadas en la autoprotección podrían canalizarse hacia la producción de soluciones climáticas creativas.

En última instancia, debe reconocerse que la gente tiene derecho a protestar. Esta es una de las libertades fundamentales garantizadas en convenios internacionales que han sido suscriptos por casi todos los Estados. Hay que entender que las protestas que provocan disrupción no dejan por ello de ser protestas pacíficas. Históricamente, las protestas han utilizado la perturbación de la vida cotidiana como medio fundamental para comunicar la urgencia de un problema y subrayar la necesidad de actuar. Así es como se ha conseguido el reconocimiento de derechos fundamentales como el sufragio universal, los derechos de los trabajadores y los derechos de las mujeres.

El pasado diciembre, el nuevo [responsable de derechos humanos](#) de la ONU, Volker Türk, [se pronunció](#) sobre el papel de la protesta en el impulso de la acción climática y la necesidad de proteger el espacio cívico de los manifestantes. Los Estados deberían prestar atención a sus palabras.



INCIDENCIA GLOBAL POR LA ACCIÓN CLIMÁTICA

El espacio cívico también es esencial a nivel internacional. En las cumbres multilaterales donde se toman decisiones sobre el clima, es vital que la sociedad civil esté presente y sea capaz de movilizarse para exigir mayor ambición, pedir rendición de cuentas a los Estados,

a las empresas de combustibles fósiles y a los financiadores, y hacer oír las opiniones de las personas más afectadas por el cambio climático. Pero a menudo eso no sucede.

POR QUÉ IMPORTA LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

“ La participación activa de la sociedad civil en las conversaciones sobre el clima no es un lujo, sino un imperativo. La sociedad civil sirve de conducto para las voces, ideas y aspiraciones de la gente, e impulsa el discurso más allá de la mera retórica. Nuestros puntos de vista y perspectivas son igualmente válidos e informados, y merecemos un lugar en la mesa.

 Disha Ravi, Viernes por el Futuro India

“ Es vital involucrar a la sociedad civil en la COP28. La sociedad civil está formada por miembros de comunidades olvidadas, las verdaderas víctimas del cambio climático. Una COP a la que sólo estén invitados presidentes y ministros no funcionará: ellos harán frente al aumento de las temperaturas encendiendo su aire acondicionado, y podrán importar alimentos cuando haya escasez local mientras la gente común se muere de hambre porque en sus tierras no llueve. Solamente las víctimas pueden informar acerca de la realidad del cambio climático y explicar cómo se manifiesta en sus comunidades.

 Guillaume Kalonji, Movimiento Levántate RDC

OTRA COP EN ESPACIO CÍVICO CERRADO

En septiembre, los EAU, país anfitrión de la COP28, fue añadido a la Lista de Vigilancia del CIVICUS Monitor, que destaca a aquellos países que experimentan un declive significativo en el respeto de las libertades cívicas. El espacio cívico en los EAU ha estado cerrado durante mucho tiempo: no se permite la expresión de discrepancias con el gobierno ni la defensa de derechos humanos, y quienes intentan alzar la voz corren el riesgo de ser criminalizados. En 2022, una Ley de Ciberdelincuencia introdujo restricciones aún más fuertes sobre la expresión en línea.

En cárceles y centros de detención hay torturas generalizadas, y al menos 58 presos de conciencia han sido mantenidos en prisión pese a haber cumplido sus condenas. Muchos de ellos formaban parte de un grupo conocido como “los 94 de los EAU”, encarcelados por el delito de reclamar democracia. Entre los encarcelados se cuenta Ahmed Mansoor, condenado a 10 años de prisión en 2018 por su trabajo de documentación de la situación de los derechos humanos, y recluso en régimen de aislamiento desde hace más de cinco años.



EAU: Se debe garantizar una COP inclusiva y liberar a personas defensoras detenidas [\(EN\)](#)



EAU: Panorama de restricciones recientes de las libertades cívicas [\(EN\)](#)



LA HISTORIA SE REPITE: UNA MIRADA RETROSPECTIVA A LA COP27

Algunos de los problemas que podrían surgir en la COP28 pueden anticiparse observando la experiencia de la COP27, celebrada en el cerrado espacio cívico de Egipto. Al igual que en los EAU, la sociedad civil aprovechó el período previo a la cumbre para llamar la atención sobre la implacable represión de los derechos humanos por parte del Estado egipcio y visibilizar el gran número de presos políticos y las torturas y malos tratos a los que son sometidos.

Y como está ocurriendo con la COP28, en lugar de responder a estas preocupaciones, el régimen egipcio utilizó el evento como una oportunidad para hacer relaciones públicas y tratar de pulir su imagen internacional. Hizo caso omiso de los llamamientos internacionales para que se abriera espacios en torno de la cumbre, celebrada en un lugar inaccesible en medio de fuertes medidas de seguridad que incluían guardias cuya visible presencia era claramente intimidatoria.

“ No había sitio donde pudiéramos juntarnos y tener conversaciones sobre temas un poco más radicales o manifestarnos en formas más confrontativas, porque la vigilancia omnipresente, a la que estaban sometidos sobre todo los activistas de la región, lo volvían muy riesgoso. Sin suficiente presión por parte de las comunidades y las juventudes, la COP termina siendo nada más que un festival climático.



María Reyes, Futuros Indígenas, México

Con anterioridad a la COP27 muchos activistas egipcios fueron detenidos por convocar protestas. Al menos a un activista

internacional se le negó la entrada a Egipto. La autorización oficial para realizar protestas en la zona designada para ello estuvo sujeta a largas esperas. Se escucharon quejas de acoso e intimidación de parte de integrantes de organizaciones internacionales de la sociedad civil. Informes de expertos independientes en derechos humanos de la ONU establecieron que varios miembros de la sociedad civil fueron interrogados y fotografiados por agentes de seguridad.

La aplicación oficial de la conferencia fue muy criticada porque permitía al gobierno egipcio acceder a mucha información de los usuarios y ejercer un alto grado de vigilancia, al punto que algunos Estados pidieron a sus delegaciones que no la utilizaran. El servicio de internet de la reunión bloqueó el acceso a los principales sitios web de noticias y a la página web de Human Rights Watch. En suma, el gobierno egipcio, en tanto que anfitrión de la cumbre, trató a la sociedad civil internacional del mismo modo en que trata a la sociedad civil nacional: con hostilidad y desprecio.

A las OSC egipcias que hacen incidencia en materia de derechos humanos se les denegó la acreditación. El gobierno fue acusado de seleccionar a dedo a las organizaciones de sociedad civil participantes para excluir a las voces disidentes. Para los participantes, la autocensura pareció formar parte del acuerdo. La sociedad civil internacional enfrentó el dilema de si participar para intentar impulsar la acción climática por todos los medios posibles, arriesgándose a legitimar el régimen, o boicotear el evento, decisión que podría desatar recriminaciones. Un año más tarde los problemas son notablemente similares.

En vísperas de la COP28, la sociedad civil ha denunciado el absurdo de celebrar una cumbre tan vital en condiciones de espacio cívico cerrado. La sociedad civil nacional no está en condiciones de influir sobre la COP28 y su proceso preparatorio, y es difícil imaginar que pueda expresarse libremente durante la cumbre.

La sociedad civil exige que el gobierno de EAU dé señales claras de que está dispuesto a respetar los derechos humanos, empezando por liberar a los presos políticos, cosa que hasta ahora no ha hecho.

“ Nos preocupa especialmente que los EAU restrinjan los movimientos y las campañas de la sociedad civil. Es fundamental que la sociedad civil y las organizaciones de pueblos indígenas puedan ejercer su derecho a expresar sus opiniones y manifestarse pacíficamente en cualquier momento de las negociaciones. De lo contrario, sus puntos de vista no se verán reflejados en los resultados y sus preocupaciones no serán tenidas en cuenta.

Gideon Abraham Sanago, Foro Indígena Pastoral de Organizaciones No Gubernamentales, Tanzania

Una señal ominosa se produjo cuando los EAU acogieron una cumbre sobre clima y salud en abril. Al parecer, se ordenó a los participantes que no criticaran al gobierno, a las empresas, a ciertos individuos o al islam, y que no protestaran durante su estancia en el país.



El presidente de la COP28, Sultan Ahmed Al Jaber, anuncia la Cumbre de Acción Climática Local de la COP28, septiembre de 2023.



- El desafío de la COP27: cómo demandar acción por el clima en un contexto represivo ▶
- COP27: demasiado poco, demasiado tarde ▶

LOS INTERESES DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES, EN PRIMER PLANO

Las restricciones del espacio cívico no son el único indicio de que los EAU no se toman en serio la COP28. El presidente de la cumbre, Sultan Ahmed Al Jaber, es también el [director](#) de la empresa estatal de combustibles fósiles ADNOC, el undécimo productor de petróleo y gas más grande del mundo. Que él esté al frente de la COP equivale a poner a un fabricante de armas a cargo de conversaciones de paz. La COP28 está siendo organizada con la [participación](#) de varios miembros más del personal de ADNOC, que actualmente está promocionando sus inversiones en energías renovables al tiempo que planea [una de las mayores](#) expansiones de extracción de petróleo y gas.

“ Nos preocupa que la COP28 se celebre en los EAU, un gran productor de petróleo y gas. Esto plantea dudas sobre si nuestras voces serán efectivamente escuchadas, ya que posiblemente la reducción de la producción de combustibles fósiles no coincida con los intereses del país anfitrión. Tuvimos el mismo problema durante la COP del año pasado, celebrada en Egipto. ¿Cómo podría la gente sentirse libre de expresar sus preocupaciones sobre el petróleo y el gas en estos contextos?

Harlee Richards, Follow This, Países Bajos

Todo parece indicar que, en vez de impulsar acciones reales, el régimen está instrumentalizando su rol de anfitrión de la COP28 para intentar limpiar su reputación, como lo sugiere la [contratación](#) de costosas empresas internacionales de lobby. Se creó una cantidad de [cuentas falsas](#) en redes sociales para alabar a los EAU como anfitrión y defenderlo de las críticas. En una lista de los principales temas de debate de la COP28 preparada por el anfitrión y luego filtrada los combustibles fósiles [no eran mencionados](#).

Una cumbre que debería servir para abordar con urgencia la crisis climática -está en cambio siendo utilizada para lavar la imagen del gobierno anfitrión. Este objetivo se vuelve más fácil de alcanzar en condiciones de exclusión de la sociedad civil.

“ Creo que las COP se están utilizando como una vidriera donde se pretende mostrar que las empresas petroleras están comprometidas con el manejo de la crisis climática, cuando en verdad todos sabemos que no es así. Es simple: si no baja la producción de los recursos fósiles, no es posible reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la crisis climática seguirá su curso catastrófico e irreversible.

Fausto Daniel Santi Gualina, pueblo Sarayaku de la Amazonia ecuatoriana

Con la sociedad civil excluida, las voces de quienes se oponen activamente a la acción climática seguirán siendo influyentes. Así ocurrió en la COP27, donde participaron [636 grupos de presión](#) de los combustibles fósiles y se fueron satisfechos. Al igual que en todas las cumbres anteriores, la declaración final no incluyó ningún compromiso de reducción del uso de petróleo y gas. No existe posibilidad de que esto cambie en la COP28.

“ Representantes de empresas de petróleo y gas participan extraoficialmente en las negociaciones sobre el clima. No tienen título, no aparecen como tales en la lista de asistentes, pero sabemos que están ahí porque los hemos visto aprovechar momentos como la COP y la pre-COP para solicitar reuniones informales con jefes de delegaciones o con el secretariado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la entidad que organiza la COP.

María Reyes, Futuros Indígenas, México

No es de extrañar que, una y otra vez, la sociedad civil haya expresado sus escasas expectativas respecto a la COP28. No hay confianza en que ésta aporte las soluciones que el mundo necesita.

Se trata de un problema totalmente evitable. Las COP deberían celebrarse en países con un espacio cívico que permita una fuerte movilización interna, y los anfitriones de las cumbres deberían respe-

tar normas estrictas en materia de acceso y participación nacional e internacional, mucho más allá de las condiciones mínimas garantizadas por el derecho internacional. Esto debería ser parte del trato, ya que cuando acogen eventos de alto nivel en su país los anfitriones reciben un gran prestigio internacional. Por nuestro futuro, no debemos permitir que la exclusión de la sociedad civil se repita.



Una activista sostiene una pancarta durante la Huelga Mundial por el Clima en Mumbai, India, septiembre de 2023.



RECOMENDACIONES

A LOS ESTADOS

- Reconocer el papel de los activistas por el clima, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas para hacer frente a la emergencia climática y proteger los ecosistemas.
- Garantizar un entorno seguro y propicio para que activistas y personas de las comunidades más afectadas por el cambio climático participen de forma significativa en la toma de decisiones para hacer frente a la crisis.
- Adoptar medidas para proteger de la violencia, los ataques, el acoso y la intimidación a las personas y grupos que trabajan por la justicia climática y ambiental.
- Garantizar investigaciones rápidas, efectivas e imparciales de todas las amenazas, agresiones y actos de violencia contra activistas y llevar ante la justicia a los autores de los delitos.
- Reconocer y apoyar los mecanismos existentes que garantizan la rendición de cuentas y el acceso a la justicia ambiental, como el Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe.
- Asegurar la reforma o derogación de toda ley que restrinja el ejercicio del derecho de reunión pacífica, incluida la legislación que criminaliza o impide las protestas en lugares específicos.
- Asegurar que toda limitación del derecho de protesta cumpla los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
- Abstenerse de utilizar un lenguaje que estigmatice, vilipendie, menosprecie o discrimine a activistas climáticos, ambientales e indígenas.
- Asegurar que las organizaciones ecologistas y los grupos indígenas puedan operar sin restricciones irrazonables, habilitando su registro legal y la búsqueda de recursos.
- Asegurar que activistas climáticos, ambientales e indígenas tengan la oportunidad de participar en las negociaciones sobre el clima y en la elaboración de políticas ambientales, y establecer puntos focales de la sociedad civil que habiliten dicha participación.

AL SECTOR PRIVADO

- Establecer políticas sólidas de salvaguarda el clima, el medio ambiente y el espacio cívico, así como mecanismos para su cumplimiento.
- Asegurar la debida diligencia, como lo establecen los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, para que los derechos humanos de personas y comunidades sean respetados en el marco de actividades y proyectos relacionados con los recursos naturales.
- Cooperar con las autoridades estatales en la investigación de agresiones contra activistas climáticos, ambientales e indígenas.
- Establecer, en consulta con las comunidades afectadas, mecanismos sólidos de reclamación y rendición de cuentas para reducir y remediar los daños a las personas, el medio ambiente y el clima.
- Divulgar información relacionada con proyectos de recursos naturales y apoyar el diálogo constructivo con el activismo.
- Dar prioridad al desarrollo de energías renovables y comprometerse a no seguir extrayendo combustibles fósiles ni financiando nuevos proyectos de este tipo.



Foto de Bernd Lauter/AFP vía Getty Images

Protesta ante la sede del Postbank en Bonn, Alemania, para reclamar que el banco deje de financiar EACOP, junio de 2023.

A LA SOCIEDAD CIVIL

- Desarrollar redes más sólidas para conectar a movimientos climáticos, activistas ambientales y personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas para compartir estrategias y movilizar la solidaridad.
- Adoptar estrategias de protección y medidas de seguridad, incluida la formación en sensibilización sobre derechos para casos de arresto y detención.
- Utilizar todas las tácticas disponibles, como protestas, campañas, incidencia, litigios, activismo de los accionistas y participación en negociaciones internacionales.
- Dar prioridad a las voces de las comunidades de base y del sur global que padecen los peores efectos del cambio climático y la degradación ambiental y asegurar que tengan un espacio prominente en la labor de incidencia y participación en las COP.
- Apoyar la negociación y adopción de un tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos.
- Incorporar la acción por el clima y la protección del espacio cívico en todas las áreas de trabajo.



Marcha en Nueva York, EEUU, en vísperas de la Cumbre de la ONU sobre la Ambición Climática, septiembre de 2023.

Foto de Spencer Platt/Getty Images



A LOS ORGANIZADORES DE LAS COP

- Desarrollar e implementar, en consulta con la sociedad civil, normas sólidas sobre la participación de la sociedad civil en las COP, con el fin de garantizar la plena participación de un amplio abanico de actores de sociedad civil, inclusive del país anfitrión y de otros países del sur global.
- Establecer, habilitar y proporcionar recursos adecuados para el funcionamiento de un punto focal de la sociedad civil que garantice el acceso y la participación de ésta.
- Facilitar financiación para apoyar la participación de la sociedad civil de base y del sur global y conceder todos los documentos de viaje necesarios.
- Desarrollar y aplicar una sólida política de conflicto de intereses para garantizar la transparencia del rol de las empresas de combustibles fósiles y de los financiadores en las negociaciones de la COP.
- Desarrollar e implementar un plan claro para aumentar la representación de mujeres en las cumbres de la COP.
- Garantizar una fuerte participación y monitoreo de la sociedad civil en los acuerdos de financiación de pérdidas y daños.
- Situar a los pueblos indígenas en el centro de las decisiones sobre financiación climática y reconocer explícitamente los derechos de las comunidades indígenas en las decisiones y acciones de la COP.
- Crear un grupo de trabajo sobre pueblos indígenas que sirva de mecanismo formal permanente en las negociaciones de la COP con el fin de garantizar que las preocupaciones de los pueblos indígenas sean escuchadas y tenidas en cuenta.

A LOS EAU COMO ANFITRIONES DE LA COP28

- Respetar el derecho a protestar y expresar disenso durante la COP28.
- Tomar medidas significativas para levantar las restricciones al espacio cívico en los EAU y respetar las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión.
- Cumplir con todas las recomendaciones realizadas a los EAU en el marco de su Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de 2023.
- Liberar a todos los activistas, defensores de derechos humanos y presos de conciencia actualmente detenidos, incluidos Ahmed Mansoor y todos los “94 de los EAU”, y retirar todas las acusaciones en su contra.
- Poner fin a la impunidad de las violaciones de derechos humanos llamando a rendir cuentas a los representantes gubernamentales que restrinjan a la sociedad civil e impidan a activistas y participantes de la COP expresar disenso.



Foto de Gulf Centre for Human Rights

Una activista de la sociedad civil reclama por la liberación de Ahmed Mansoor durante la Campaña Internacional por la Libertad en los EAU.

AGRADECIMIENTOS

El análisis contenido en este informe no habría sido posible sin los aportes y opiniones de activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil de todo el mundo. Agradecemos a las siguientes personas entrevistadas sus contribuciones a este informe:

▶ Caroline Owashaba

▶ Disha Ravi

▶ Estelle Ewoule Lobé

▶ Fausto Daniel Santi Gualina

▶ Gabriella Abbate

▶ Gideon Abraham Sanago

▶ Guillaume Kalonji

▶ Harlee Richards

▶ Ireen Twongirwe

▶ María Reyes

▶ Marjolein Kuijers

▶ Mitch Rose

▶ Nelli Stevenson

▶ Penelope Faulkner

▶ Sieger Slood

▶ Zaki Mamdoo

▶ Zoe Ruge

▶ Todas las citas utilizadas en este informe son extractos editados de entrevistas con activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil. Para leer las entrevistas completas, visite el [repositorio de entrevistas](#) de CIVICUS Lens.



CONÉCTESE CON NOSOTROS



OFICINA CENTRAL
25 Owl Street, 6to piso
Johannesburgo, 2092
Sudáfrica
Tel: +27 (0) 11 833-5959
Fax: +27 (0) 11 833-7997

CENTRO ONU: NUEVA YORK
We Work
450 Lexington Ave
Nueva York, NY, 10117
Estados Unidos

CENTRO ONU: GINEBRA
11 Avenue de la Paix
Ginebra, CH-1202
Suiza
Tel: +41 (0) 22 733 3435
